

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación: 2022197584-015-000

Fecha: 2023-04-20 15:55 Sec.día 637

Anexos: No

Trámite: 125-ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO SANCIONATORIO

Tipo doc: 80-RESOLUCIONES

Remitente: 540000-540000-DELEGATURA PARA RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Destinatario: 1 - 57-BANCO PICHINCHA S.A.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0573 DE 2023

(20 DE ABRIL)

Por la cual se impone una sanción

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA RIESGO DE
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

En ejercicio de sus facultades legales y, en especial, de las que le confieren los artículos 107 y 211 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, (en adelante EOSF), el artículo 11.2.1.4.29. del Decreto 2555 de 2010, y conforme a las reglas pertinentes del régimen sancionatorio contemplado en el numeral 4 del artículo 208 del EOSF,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que el BANCO PICHINCHA S.A. (en adelante el BANCO PICHINCHA o el Banco), con **NIT. 890200756-7**, se encuentra sometido a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante SFC) de conformidad con lo dispuesto en el literal a), numeral 2° del artículo 325 del EOSF, en concordancia con el artículo 11.2.1.6.1 del Decreto 2555 de 2010.

SEGUNDO.- Que entre el 29 de julio y el 30 de septiembre de 2022, la SFC llevó a cabo un proceso de inspección “*Extra Situ*” al BANCO PICHINCHA, con el propósito de establecer los riesgos inherentes y de cumplimiento del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT); evaluar el conocimiento de los beneficiarios finales de los clientes persona jurídica y la calidad de la base de datos de los clientes en la gestión operativa; evaluar el diseño de las etapas del sistema de administración de riesgo de LAFT y el cálculo de indicadores de desempeño del análisis de operaciones alertadas resultantes del diseño del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT en la gestión de riesgos.

TERCERO.- Que los resultados de la Visita de Inspección, se consignaron en el Informe de Cumplimiento número 2022138583-092-000 del 14 de octubre de 2022 y que mediante oficio

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

radicado con número 2022197584-000-000 del 22 de diciembre de 2022, se formuló Pliego de Cargos al BANCO PICHINCHA por los hechos descritos en los numerales 3.1.1, 3.1.1.1, 3.1.1.2 y 3.1.1.3 del citado Informe, concediéndosele al Banco un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de su notificación para rendir explicaciones, de conformidad con lo dispuesto por los literales g) y h) del numeral 4° del artículo 208 del EOSF.

CUARTO.- Que mediante comunicación radicada bajo el número 2022197584-008-000 del 3 de febrero de 2023, el BANCO PICHINCHA, actuando por conducto de su Representante Legal, Dr. GERMÁN ENRIQUE RODRÍGUEZ PERDOMO, rindió las explicaciones de carácter institucional dentro del término dispuesto para ello, aportando pruebas documentales para apoyar sus afirmaciones.

QUINTO.- Que mediante Auto número 001 del 23 de febrero de 2023, notificado el 24 de febrero de 2023, el Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo decretó la incorporación de las pruebas presentadas, el cierre de la etapa probatoria y se le dio traslado al Banco investigado para que presentara alegatos de conclusión dentro del término de diez (10) días hábiles contados a partir de su notificación.

SEXTO.- Que mediante escrito radicado el 8 de marzo de 2023 en la SFC con el número 2022197584-013 dentro del término establecido para el efecto, el BANCO PICHINCHA presentó los respectivos alegatos de conclusión, los cuales serán evaluados dentro del presente proveído conjuntamente con los argumentos de defensa planteados en el documento de explicaciones, teniendo en cuenta que son similares en ambos escritos.

SÉPTIMO.- Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el numeral 4 del artículo 208 del EOSF, una vez vencido el término de traslado y agotada la etapa probatoria, es procedente adoptar una decisión de fondo.

OCTAVO.- Que establecidos de esta forma los antecedentes de la presente actuación administrativa y con el fin de analizar los argumentos expuestos en su defensa por el BANCO PICHINCHA, la SFC se pronuncia de fondo sobre los descargos y los alegatos de conclusión remitidos por el Banco Investigado y cuyo texto integral se puede consultar en los radicados correspondientes que forman parte de esta actuación.

8.1 ARGUMENTOS DEL BANCO PICHINCHA

El Banco en sus descargos manifiesta de manera expresa frente a los dos cargos endilgados que: *“... aceptamos de manera expresa y sin lugar a equívocos conforme lo establece el literal i) del numeral 2 del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), los cargos relacionados con: i) conocimiento del cliente y ii) listas vinculantes”*.

Además, el BANCO PICHINCHA señala que: *“Sin perjuicio de la aceptación realizada, se informa a la SFC que los descargos que serán presentados en el presente escrito no pretenden como tal desvirtuar la imputación realizada por la SFC en el Pliego de Cargos, aduciendo circunstancia que puedan llegarse a entender como que el Banco esta justificando su proceder o donde se busca que las actividades realizadas ex post facto implementadas para subsanar las irregularidades que fueron evidenciadas, busquen exonerar la responsabilidad y por ende la imposición de la respectiva sanción.*

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

“Por el contrario, la intención del Banco consiste en que si bien se está aceptando sin lugar a equívocos los cargos imputados, se busca presentar ante la SFC todos los correctivos que se han implementado y se continuarán implementando, conforme a los planes de trabajo presentados durante la presente actuación administrativa y en particular, los incluidos en la comunicación del 29 de diciembre de 2022 radicada bajo el número 2022138583-093-000, y el compromiso para dar correcto cumplimiento a todas las obligaciones en materia SARLAFT, esto último como posible criterio para calcular de manera objetiva el monto de la misma, teniendo en cuenta la disposición del Banco en realizar todos los ajustes necesarios para fortalecer su sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)”.

Seguidamente, el BANCO PICHINCHA bajo el título de “2 Antecedentes” resume los antecedentes de la actuación administrativa desde el momento en que se llevó a cabo el proceso de inspección y a renglón seguido alude al “3. Pliego de cargos” donde se refiere al concepto de violación y normas presuntamente incumplidas de los dos cargos y anota respecto de ellos que se incluyeron los numerales 4.2.2.2.1.1.2 y 4.2.2.1.4 del Capítulo IV, Título IV Parte I de la CBJ de la SFC, “... El cual fue modificado por la Circular Externa 011 de 2022 de la SFC, que a pesar que entró a regir a partir de su publicación el 20 de mayo de 2022, las entidades destinatarias de dicha Circular Externa tenían hasta el 6 de enero de 2023 para ajustar el sistema SARLAFT...”, conforme a “... las instrucciones previstas, lo cual fue incluido en el Manual SARLAFT versión 039, mediante aprobación de la Junta Directiva en sesión de julio de 2022, lo cual se encuentra consignado en el Acta No. 722. Por lo cual, respetuosamente consideramos que este artículo no resultaba aplicable para la época en que se llevó a cabo la inspección Extra Situ”.

Posteriormente, la Entidad Vigilada en el numeral “4 Actividades desplegadas por el Banco frente a los cargos formulados” describe ampliamente las actividades adelantadas frente a los cargos formulados en donde reitera que lo dicho allí no tiene como objetivo desvirtuar los mismos sino poner de presente a la SFC la voluntad y esfuerzos realizados para realizar los ajustes que le permitan cumplir las normas sobre el SARLAFT y subsanar los incumplimientos evidenciados, todo para que el Supervisor pueda calcular de manera objetiva la sanción que considere imponer, atendiendo los principios y criterios aplicables.

Seguidamente y bajo el título de “5. Consideraciones frente a los principios y criterios de graduación de las sanciones administrativas”, el BANCO PICHINCHA después de insistir en que acepta de manera expresa los cargos que le fueron imputados en el Pliego de Cargos que dieron origen a la presente actuación, y que no pretende desvirtuar los hechos para obtener una exoneración por sus omisiones, sino que tienen el propósito de que se tengan en cuenta para la graduación de la sanción, transcribe un extracto de un fallo del Consejo de Estado que alude a este asunto y manifiesta que sus actuaciones se han ceñido a la buena fe, de lo cual hace una amplia exposición, para seguidamente analizar los criterios de graduación de las sanciones administrativas.

Con el título de “6. Petición” manifiesta:

“Teniendo en cuenta el contenido del presente escrito de descargos, en el cual se está aceptando de manera expresa los cargos previstos en el Pliego de Cargos por parte de la SFC, el análisis realizado por el Banco y la presentación de las actividades que se han ejecutado y que están pendientes por ejecutar en los planes de trabajo presentado, respetuosamente solicitamos la finalización de la presente actuación administrativa y que de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

decidir la Superintendencia sancionar al Banco con una sanción económica, ésta sea ajustada a los criterios para la graduación de las sanciones”.

Finalmente aporta pruebas documentales relacionadas con sus argumentos.

8.2. CONSIDERACIONES DE LA SFC SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS Y ACEPTACIÓN DE CARGOS EXPUESTOS POR LA ENTIDAD VIGILADA EN EL ESCRITO DE EXPLICACIONES Y EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

8.2.1. Primer cargo: Conocimiento del cliente

Frente a los dos cargos el BANCO PICHINCHA tanto en su escrito de descargos radicado con el número 2022197584-008 del 3 de febrero de 2023, como en el de alegatos de conclusión radicado con el mismo número con derivado 014 del 8 de marzo del mismo año, manifestó de manera tajante que aceptaba las imputaciones efectuadas, y que con los descargos presentados no se pretendió desvirtuar la imputación ni justificar su proceder, sino mostrar factores atenuantes determinantes para fijar el monto de la multa a imponer, aún cuando en el punto “6 *Petición*” de su escrito de descargos solicita que como consecuencia de la aceptación y las medidas *ex post facto* adoptadas para subsanar los incumplimientos evidenciados, y lo agregado en punto “4 *Solicitud*” de sus alegatos de conclusión, respecto a la buena fe con que ha actuado y los argumentos de graduación de las sanciones que presentó, se finalice la actuación administrativa.

No obstante lo anterior, bien vale recordar que la situación evidenciada por esta Superintendencia en el BANCO PICHINCHA y que quedó plasmada en el Pliego de Cargos origen de la presente actuación administrativa, reviste una relevancia notable para la prevención del riesgo de LAFT dentro del Banco, pues aunque éste guardaba, así fuera parcialmente, información de sus clientes persona jurídica y de los accionistas o asociados con una participación directa de más del 5% del capital social, aporte o participación, ella se encontraba almacenada en carpetas físicas sin que contara con algún mecanismo que le permitiera a la Entidad Vigilada su aprovechamiento efectivo para la gestión del riesgo LAFT.

Similar situación ocurría con la información de los beneficiarios finales de los clientes persona jurídica, en tanto al tenerla almacenada únicamente en carpetas físicas, no estaba disponible para efectuar sobre ella alguna gestión, como puede ser el cruce de la misma con listas vinculantes o el monitoreo de operaciones; y es que no basta con que el Banco almacene información de sus clientes persona jurídica, de los accionistas o asociados de éstos y de los beneficiarios finales, si la misma no es aprovechable, situación que se hizo evidente por el desconocimiento que tenía el BANCO PICHINCHA de cambios en la participación patrimonial de algunos de ellos, como quedó descrito en el Informe de Cumplimiento.

Por lo anterior, a pesar de que las entidades deben contar con algún aplicativo o herramienta contentiva de la información de los accionistas o asociados y consecuentemente de los beneficiarios finales de sus clientes persona jurídica, que les permita gestionarla para efectos de prevención del riesgo de LAFT, el BANCO PICHINCHA carecía de ella, con lo cual desatendió las normas imputadas como incumplidas, pues hizo caso omiso de sus obligaciones, no solamente las relacionadas con el conocimiento de sus clientes, sino también con su deber de tener la información disponible.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

De esta manera, ante la grave situación presentada en el BANCO PICHINCHA y aún cuando acepta de manera expresa los cargos que le fueron imputados y presenta medidas adelantadas para subsanar las omisiones cometidas, no es dable acceder a su solicitud de finalizar la actuación administrativa sin imponer una sanción, como lo daría a entender en su escrito, no solo porque se trata de medidas *ex post facto* que en nada le eximen de responsabilidad, sino por el riesgo que tuvo durante el tiempo en que estuvo expuesto el Banco, al menos durante el periodo evaluado.

De otra parte, en cuanto a lo mencionado respecto a que la Circular Externa 11 de 2022 de la SFC entró a regir a partir de su publicación y las entidades destinatarias tenían hasta el 6 de enero de 2023 para ajustar su sistema SARLAFT, debe señalarse que le asiste a la Entidad Vigilada razón en tales afirmaciones, es decir, en cuanto a la entrada en vigencia de la misma de manera inmediata, así como en el máximo plazo dado por la norma para el ajuste del sistema. En el caso objeto de análisis y de acuerdo con la versión 39 del Manual SARLAFT que aportó el Banco Pichincha al proceso, en efecto el 28 de julio de 2022 se aprobaron cambios que acogieron lo previsto en la nueva Circular Externa 11; es decir, dentro del plazo otorgado por la transición. Así las cosas, la norma vigente, aplicable y además en relación con la cual ese Establecimiento Bancario habría ajustado su sistema es la citada en la ya mencionada Circular Externa.

Sin perjuicio de tal consideración, en todo caso los cambios incorporados en la norma que se reprocha también vulnerada, no inciden en la tipificación inicial de la conducta pues, el conocimiento de los clientes persona jurídica, sus asociados y beneficiarios finales era exigible aún antes de la modificación de las instrucciones contenidas en la Circular Externa precitada.

8.2.2. Segundo cargo: Listas vinculantes

Como se consideró en el punto anterior, el BANCO PICHINCHA aceptó expresamente las imputaciones que se le hicieron a través del Pliego, tanto del primero como del segundo cargo.

En cuanto a este segundo cargo, y sin perjuicio de la aceptación de las omisiones en que incurrió el Banco, en los términos descritos en el Pliego de Cargos, las medidas que pudiera haber adoptado para subsanarlas o la buena fe con que hubiera actuado, es preciso recordar la importancia de que las entidades financieras consulten las listas vinculantes para Colombia, tanto al inicio de la relación contractual como durante la vigencia de la misma con el propósito de adoptar las medidas de control apropiadas y suficientes que les permitan evitar contratar con las personas allí incluidas o continuar relaciones contractuales, en caso de que ya estuvieran vinculadas, situación frente a la cual, se les hace un monitoreo especial.

No obstante lo anterior, el BANCO PICHINCHA, como lo pudo evidenciar la Comisión de Inspección de esta Superintendencia, no consultó en todas las ocasiones o lo hizo de manera incompleta, frente a los accionistas y beneficiarios finales de sus clientes, quienes, a la larga actúan a través de este último, poniendo a ese Establecimiento Bancario en inminente riesgo de ser utilizada para actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo, como se puede observar en los ejemplos incluidos el numeral 3.1.1.3 del Informe de Cumplimiento.

No sobra hacer la misma claridad que se hizo en relación con el cargo anterior sobre la vigencia de la Circular Externa 11 de 2022 así como una precisión específica en relación con la conducta que se endilgó respecto del incumplimiento de la consulta en listas vinculantes de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

los accionistas y beneficiarios finales de sus clientes, que tampoco fue creada en la más reciente norma sino que ya era exigible con anterioridad a su expedición.

8.2.3. De las pruebas y factores atenuantes

En su escrito de descargos y de alegatos de conclusión, y aún cuando el BANCO PICHINCHA aceptó de manera expresa y sin lugar a equívocos los cargos que le fueron imputados, incluyó los siguientes documentos que la SFC incorporó como pruebas mediante el Auto 001 del 23 de febrero de 2023:

“Anexo 1. Certificado sobre la situación actual del Banco Pichincha S.A. del 2 de febrero de 2023 expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.

“Anexo 2. Manual de procedimiento de vinculación de clientes persona jurídica – cartera comercial del Banco Pichincha S.A. del 11 de enero de 2023.

“Anexo 3. Manual Regulatorio Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT del Banco Pichincha S.A. con fecha 22 de julio de 2022.

“Anexo 4. Documento de nominado Anexo I Manual en Listas SARLAFT.

“Anexo 5. Comunicación del Banco Pichincha del 29 de diciembre de 2022 dando respuesta a un requerimiento de información de la SFC referente a los resultados del proceso de inspección efectuado entre el 29 de julio y 30 de septiembre de 2022.

“Anexo 6. Constancia de radicación ante la SFC del documento descrito en el anexo 5. del presente Auto.

“Anexo 7. Documento denominado Certificación Ejecución Planes de Acción SARLAFT – Banco Pichincha S.A.”.

Si bien las pruebas aportadas por el BANCO PICHINCHA sirven de soporte a lo manifestado en sus explicaciones, tanto para dejar constancia de su representación como de las acciones llevadas a cabo para subsanar las situaciones evidenciadas por esta Superintendencia, lo cierto es que con las mismas no se logra probar que las omisiones no se presentaron; por el contrario, dejan clara evidencia de las acciones emprendidas para corregirlas. Además de lo anterior, tales documentos sirven de sustento a lo manifestado por el Banco para solicitar la atenuación de la sanción a imponerse, por lo que serán tenidos en cuenta al momento de analizar los factores de graduación para su determinación.

En cuanto a las pruebas documentales aportadas con el escrito de alegatos de conclusión presentados por el BANCO PICHINCHA, basta señalar que mediante Auto 001 del 23 de febrero de 2023 se cerró la etapa probatoria del presente proceso administrativo sancionatorio, de manera que dichos documentos no serán incorporados al expediente por ser presentados extemporáneamente.

NOVENO.- PROCEDENCIA DE LA SANCIÓN

Con fundamento en lo establecido en el literal i) del numeral 5° del artículo 326 del EOSF, en armonía con lo dispuesto en el artículo 107 del mismo Estatuto, la SFC tiene dentro de las facultades de prevención y sanción la de *“Imponer a las instituciones vigiladas, directores, revisor fiscal o empleados de la misma, previas explicaciones de acuerdo con el*

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

procedimiento aplicable, las medidas o sanciones que sean pertinentes, por infracción a las leyes, a los estatutos o a cualquier otra norma legal a que deban sujetarse, así como por inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia Bancaria” (Hoy Superintendencia Financiera de Colombia).

Por su parte, el numeral 1° del artículo 211 del EOSF prevé las sanciones de carácter administrativo que esta Superintendencia puede imponer a las entidades sometidas a su vigilancia cuando: *“a) Incumplan los deberes o las obligaciones que la ley les impone, (...)”,* mientras que el artículo 107 del señalado ordenamiento dispone: *“El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores por la no adopción o aplicación de los mecanismos de control dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las consecuencias penales a que hubiere lugar”.*

Ahora bien, en el caso bajo estudio es claro que los reproches efectuados al BANCO PICHINCHA se fundan en la infracción directa y concreta de normas de obligatorio cumplimiento, siendo evidente que dicha Entidad Vigilada para la época de los hechos cuestionados no cumplió las obligaciones expresamente señaladas en las normas citadas como infringidas en el Pliego de Cargos que dio origen a la presente Resolución.

DÉCIMO.- GRADUACIÓN

Según lo dispuesto en el numeral 3, del artículo 208 del EOSF, la SFC puede imponer las sanciones de carácter administrativo que allí se establecen.

Con el propósito de graduar la sanción, deben ser considerados los criterios establecidos en el numeral 2° del artículo 208 del EOSF, de la siguiente manera:

“a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la Superintendencia Bancaria, de acuerdo con las atribuciones que le señala el presente Estatuto”.

Como quedó demostrado en este proveído, es incuestionable que con las faltas cometidas para la época de los hechos objeto de análisis, el BANCO PICHINCHA tuvo una exposición al riesgo de ser utilizada para el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, poniendo en peligro los intereses jurídicos tutelados por esta Superintendencia.

En efecto, el incumplimiento o la inobservancia de las obligaciones legales y de las instrucciones impartidas por el Organismo de Supervisión en torno al SARLAFT reviste gravedad, pues además de comprometer la reputación y la estabilidad de la Entidad Vigilada y del sistema del cual ésta hace parte, puede incidir de forma directa en el orden público económico y en la confianza depositada por el público en el sector financiero. En este caso en particular destaca la omisión de conocimiento del cliente, pieza fundamental del engranaje del Sistema.

“b) El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros por la comisión de la infracción, o el daño que tal infracción hubiere podido causar.”

Es claro que con la infracción cometida, el BANCO PICHINCHA no tuvo ningún beneficio económico que esta Superintendencia haya podido probar.

“c) La reincidencia en la comisión infracción.”

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

El BANCO PICHINCHA mediante Resolución 1578 de 2016, confirmada en su totalidad por Resolución 1876 de 2017, fue sancionado por la SFC por presentar deficiencias en el SARLAFT, entre otras, en su infraestructura tecnológica y mecanismos de conocimiento del cliente. De igual manera, el BANCO PICHINCHA fue sancionado mediante Resolución 792 de 2017 confirmada en su totalidad por la Resolución 688 de 2018, por presentar igualmente deficiencias en el SARLAFT, relacionadas con el Oficial de Cumplimiento, su nombramiento, su posesión, su remoción y su ejercicio, antecedentes que serán tomados como agravante al determinar el monto de la sanción.

“d) La resistencia, negativa, u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión de la Superintendencia Bancaria” y “e) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción, o cuando se utiliza persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos.”

De acuerdo con la documentación que reposa en el expediente, no hay evidencia de que se hubiera presentado resistencia u obstrucción a la acción investigadora de la Superintendencia, como tampoco que la Entidad Vigilada hubiera utilizado medio alguno para encubrir la realidad de los hechos, lo que será tomado en consideración para determinar el monto de la sanción.

“f) El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes”.

Sobre este criterio debe señalarse que, como está demostrado en la presente actuación, el BANCO PICHINCHA no estaba atendiendo adecuadamente las normas relativas al SARLAFT y que fueron debidamente citadas en el pliego de cargos, lo que pone de relieve la falta de prudencia y diligencia en la gestión de prevención del riesgo de LAFT.

Sin perjuicio de lo anterior, esta causal no será empleada para agravar la sanción, en la medida que el grado de imprudencia y negligencia que tuvo lugar en este caso, se desprende directamente de la misma conducta infractora que originó la presente actuación administrativa.

“g) La renuencia o desacato a cumplir con las órdenes impartidas por la Superintendencia Bancaria.”

No se evidencia dicha conducta en la presente actuación, lo cual será tenido en cuenta al momento de determinar el monto de la sanción.

“h) El ejercicio de actividades o el desempeño de cargos sin que se hubiere posesionado ante la Superintendencia Bancaria cuando la ley así lo exija.”

Es evidente que este criterio no aplica porque los asuntos mencionados no han sido objeto de reproche por esta Superintendencia.

“i) El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar.”

Sobre el particular, se hace necesario precisar que dentro del expediente, específicamente en sus descargos como en los alegatos de conclusión, el BANCO PICHINCHA acepta expresamente y de manera inequívoca haber incurrido en las infracciones a las normas que

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

se citaron como infringidas, sin intentar justificar su desacato, por lo que este criterio se toma como atenuante de la conducta de la Entidad Vigilada.

“j) Igualmente deberá considerarse si se adoptaron soluciones a favor del consumidor financiero dentro del trámite de quejas o reclamos, así como la implementación de medidas de mejoramiento como consecuencia de las mismas.”

Es evidente que este criterio no aplica al caso concreto, pues se refiere al consumidor financiero, asunto que no es cuestionado en la presente actuación.

Así las cosas, al estar demostradas las conductas infractoras en las que incurrió el BANCO PICHINCHA, esto es, la desatención a las normas relacionadas con la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, esta Superintendencia estima procedente imponer, atendiendo los principios y criterios de graduación señalados en los artículos 208 y 211 numeral 3 del EOSF, sanción de carácter administrativo consistente en *“Multa pecuniaria a favor del Tesoro Nacional. (...)”*.

El numeral 3° del artículo 211 del EOSF dispone: *“Cuando la violación a que hace referencia el numeral primero del presente artículo recaiga sobre las disposiciones contenidas en el Capítulo XVI de la Parte Tercera del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la multa que podrá imponerse será hasta de mil setecientos cuarenta y dos millones de pesos (\$1.742.000.000) de 2002”. “Estas sumas se reajustarán en la forma prevista en el numeral 3 del artículo 208 de este Estatuto”. Para la fecha de los hechos, la multa máxima que puede imponer esta Superintendencia es de \$4.166.585.873.*

De esta manera, es clara la procedencia de la sanción contra el BANCO PICHINCHA S.A. por el incumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la prevención del riesgo de LAFT, lo que determina la procedencia de la sanción que por este acto se impone.

En este orden, por los incumplimientos descritos en el cargo Primero - Conocimiento del Cliente y por el cargo Segundo – Listas Vinculantes y habiendo considerado los criterios de graduación ya mencionados, así como la gravedad de los hechos, los factores atenuantes y agravantes correspondientes y respetando el valor máximo aplicable, se impondrá la multa que se indica en la parte resolutive de la presente Resolución.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- SANCIONAR CON MULTA al BANCO PICHINCHA S.A. con **NIT 890200756-7**, por la suma de MIL MILLONES DE PESOS (\$1.000.000.000.00) M/CTE a favor del Tesoro Nacional por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución, monto que se discrimina de la siguiente manera de acuerdo a cada uno de los cargos:

Por el Cargo Primero - Conocimiento del Cliente, la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS (\$900.000.000.00) M/CTE.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Por el Cargo Segundo - Listas Vinculantes, la suma de CIENTO MILLONES DE PESOS (\$100.000.000.00) M/CTE.

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago de la multa que mediante esta resolución se impone se debe efectuar teniendo en cuenta el procedimiento establecido por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de cualquiera de los dos (2) canales habilitados para el efecto

1. Cuenta de depósito en el Banco de la República, transferencia a través del servicio SEBRA-CUD, indicación:

Entidad financiera	Banco de la República
Nit:	860005216-7
Tipo de traslado	Traslado SEBRA - CUD
N° de cuenta.	61012027
Denominación:	DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS ENTIDADES
Código de portafolio	365 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Código de operación	137

Si se utiliza este medio, adicionalmente se debe informar el pago al Grupo de Flujo de Caja de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, remitiendo el soporte respectivo.

Es importante mencionar que esta cuenta depósito está habilitada para recibir únicamente los traslados vía SEBRA que se efectúen a través de los Bancos Comerciales por cuanto no acepta transacciones en las ventanillas (Cheque y/o efectivo) a nivel nacional.

2. Transacción PSE; página web del Banco Agrario de Colombia, Punto virtual pagos electrónicos / categorías / pagos DTN, indicación:

Entidad financiera	Banco Agrario
N° de cuenta.	300700011459
Nombre de la cuenta	DTN OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES NO ESPECIFICADAS ENTIDADES
Código de portafolio	365 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Esta cuenta solo recibe transacciones electrónicas vía PSE; está restringida para pagos en ventanilla, ya sea en efectivo y/o en cheque.

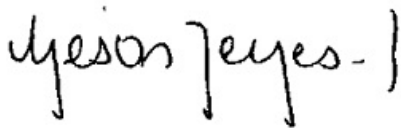
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago deberá realizarse a más tardar el día hábil siguiente al de la fecha de ejecutoria de la presente resolución. A partir de esa fecha y hasta el día de su pago se causará un interés equivalente a una y media veces (1.5) el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo periodo sobre el valor insoluto de la sanción. La consignación deberá acreditarse ante la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Entidad dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la ejecutoria.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente al doctor **GERMÁN ENRIQUE RODRÍGUEZ PERDOMO**, Representante Legal del BANCO PICHINCHA S.A., o a quien haga sus veces, el texto de la presente Resolución, entregándole copia íntegra de la misma y haciéndole saber que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Financiero de Colombia, el cual se debe interponer personalmente y por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la misma.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los veinte (20) días de mes de abril de 2023



CESAR OCTAVIO REYES ACEVEDO

540000-DELEGADO PARA RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

540000-DELEGATURA PARA RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Copia: 330000 Delegatura para Intermediarios Financieros

Doctor
GERMÁN ENRIQUE RODRÍGUEZ PERDOMO
Representante Legal
1-57 Banco Pichincha S.A.
Av. de las Américas No. 42 - 81
Bogotá D.C.

Trámite:
Elaborado por: Julián Venegas Gómez
Revisado por: Ingreed Denisse Zapata Ariza

544000